



NUE 26-A-2020 (RG)

Recurso de apelación

██████████ contra la Municipalidad de Ahuachapán

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de enero de dos mil veintiuno.

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por la ciudadana ██████████, en adelante "la parte apelante" o "la apelante", en contra de la resolución emitida por el Oficial de Información de la **Municipalidad de Ahuachapán**, bajo la referencia **AMA-UAIP-001/2020**, de fecha 20 de enero de este año.

Descripción del caso

I. El 7 de enero del presente año, la apelante presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la **Municipalidad de Ahuachapán**, una solicitud en la que requirió información concerniente a: "1. *Copia certificada del Expediente laboral de la titular Karen Ivette Chávez Laguán, quien se desempeñó como auxiliar del Dpto. de Ctas corrientes (sic); 2. Copia certificada de todas las actas y acuerdos municipales del ejercicio admvo (sic) 2020; 3. Copia certificada de todas las disposiciones realizadas el día seis de enero del ejercicio admvo (sic) 2020*".

La solicitud planteada por la apelante ante el ente obligado, fue tramitada de conformidad con el art. 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y artículo 55 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública y se procedió a trasladar el requerimiento hacia el Departamento de Recursos Humanos, por lo concerniente al numeral uno; y al Departamento de Secretaría Municipal de dicha municipalidad, mediante Memorándum sin referencia de fecha 7 de enero de 2020, por lo relativo al numeral dos y tres. En ese contexto, en cuanto al primer numeral, según consta en expediente se hizo entrega de lo peticionado por la ciudadana; en cuanto al numeral dos la unidad administrativa, según lo



hizo constar el oficial de información en la resolución recurrida, no remitió ninguna clase de correspondencia a lo peticionado; y por último, respecto al numeral tres, en audiencia de avenimiento llevada a cabo el día 24 de julio del presente año, se acordó la entrega de la información respectiva, la cual fue recibida por parte de la ciudadana [REDACTED] quedando de esa manera readecuado el objeto de controversia únicamente tratándose de lo relativo al numeral dos detallado en líneas que preceden, según lo ordenado en auto emitido por este instituto en fecha dos de diciembre de este año.

Sobre lo anterior, el ente obligado en la resolución impugnada, a través de su oficial de información, manifestó que la documentación solicitada se encuentra bajo la categoría de información pública oficiosa, y que su acceso es irrestricto; sin embargo, en la parte resolutive del referido auto manifiesta que se ordena al secretario municipal entregar lo relacionado al numeral dos, y seguidamente *“III. Declárese imposibilitado dar respuesta a los(sic) peticionado en el numeral dos (...) en virtud a que secretaría municipal no remitió ninguna correspondencia a lo peticionado”*.

En virtud de lo anterior, la apelante interpuso el recurso de apelación respectivo ante la Municipalidad de Ahuachapán, expresando su inconformidad ante tal respuesta, mismo que fue remitido a este Instituto por la referida institución, junto con el expediente administrativo, con referencia AMA-UAIP-001-/2020 (AC).

Análisis del caso:

Para el análisis que nos concierne, el examen del caso llevará el orden lógico siguiente: **(I) Principio de máxima publicidad y sus efectos; (II) Análisis del caso en concreto.**

I. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información, contenido en el Artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a

¹ Corte IDH., *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte IDH., *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones².

En ese orden, el Art. 4 letra “a” de la LAIP establece la máxima publicidad como principio rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. Entonces, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la Corte IDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁴, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁶; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación⁷.

En relación a las limitaciones al DAIP se ha pronunciado la “Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión”, en la que se efectuó una formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información: que “el derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad”, que **“las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando**

² CJI/RES. 147 (LXXIII O/08), *Principios sobre el derecho de acceso a la información*, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI_RES_147_LXXIII_O_08.p

³ Corte I.D.H.- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quiénes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁶ Ídem

⁷ Ídem



ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información”, y que “la autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones”⁸.

II. Para el caso en comento, el ente obligado no entregó la información solicitada debido a que la Unidad Administrativa correspondiente no la remitió oportunamente a la Unidad de Acceso a la Información Pública de dicha municipalidad.

El Art. 6 de la LAIP, define como **información pública** aquella información en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fecha de elaboración y que no sea confidencial. Dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada, o conservada por éstos a cualquier título.

Por otro lado, el mismo artículo 6 define la **información pública oficiosa** como aquella información pública que los entes obligados deberán difundir al público en virtud de esta Ley, sin necesidad de solicitud directa. Este tipo de información siempre debe estar a disposición del público, debe divulgarse y actualizarse constantemente, para que los interesados puedan acceder a ella sin ningún inconveniente. Por ello, el Art. 10 de la LAIP establece una serie de ítems de información y/o documentación que los entes obligados deberán divulgar oficiosamente y poner a disposición y conocimiento de los ciudadanos.

En tal sentido, de conformidad con el art. 17 de la LAIP, los concejos municipales tendrán como información pública oficiosa las actas de concejo municipal, y las actas que levante el secretario municipal sobre los mecanismos de participación ciudadana, e informe anual de rendición de cuentas. En ese orden, dado que la información objeto de este procedimiento de apelación se encuentra relacionada a actas y acuerdos municipales del ejercicio administrativo 2020, debe entenderse que los datos solicitados no están sujetos, en principio, a ningún tipo de restricción.

⁸ Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp

De igual forma, este Instituto considera a bien enfatizar que la LAIP se ve permeada por el principio de Máxima Publicidad, positivado en su art. 5, lo que implica que siempre que exista duda sobre el carácter público o sobre alguna de las excepciones, se hará prevalecer el criterio de publicidad. Aunado a lo anterior, ya que no ha existido pronunciamiento por parte de la **Municipalidad de Ahuachapán**, no es necesario entrar a analizar una postura contraria en la que se argumente la reserva o la confidencialidad de la información.

En consonancia con las disposiciones arriba citadas, es concluyente que no existe ninguna razón legítima para restringir a la apelante el acceso a la información requerida, máxime si se trata de información que debe estar a disposición del público sin necesidad de mediar solicitud de la misma, por lo que esta debe ser entregada a la brevedad de manera íntegra, salvo que alguno de esos documentos consigne en su contenido datos personales de terceros, tales como: números de DUI, NIT, cuentas bancarias, direcciones de correo electrónico, números telefónicos, entre otros datos personales que puedan constar en dicha documentación y sean susceptibles de ser protegidos; en cuyo caso la información deberá ser entregada en versión pública, de conformidad al Art. 30 de la LAIP.

Decisión del caso:

III. Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, el principio de integridad de la información y los arts. 6 y 18 de la Cn, 52 inciso 3º, 58 letras “b”, “d” y “g”; 94, y 96 letra “d” de la LAIP; y, 79 y 80 del Reglamento de la LAIP, este Instituto, **resuelve:**

a) Modificar la resolución emitida por el Oficial de Información de la **Municipalidad de Ahuachapán**, bajo la referencia **AMA-UAIP-001/2020**, de fecha 20 de enero de este año.

b) Ordenar al **titular** de la **Municipalidad de Ahuachapán** que, a través de su oficial de información, entregue a [REDACTED] la información concerniente en: *“Copia certificada de todas las actas y acuerdos municipales del ejercicio administrativo 2020”*, en un plazo de **cinco días hábiles**, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución.

c) Requerir al **titular** de la **Municipalidad de Ahuachapán** que, en el plazo de **veinticuatro horas**, luego de finalizado el plazo estipulado en la letra c) de esta parte

resolutiva, remita a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Este informe también podrá ser remitido vía electrónica a la dirección oficialreceptor@iaip.gob.sv

d) Hacer saber a las partes que contra este acto no cabe recurso en esta sede administrativa de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, si así se considerase necesario.

e) Remitir el presente procedimiento a la Unidad de Cumplimiento para que verifique la ejecución de esta resolución.

f) Publíquese esta resolución oportunamente.

g) Notificar esta resolución a la parte apelante al correo karen12pin@gmail.com o al número de teléfono: 7151-2239; y a la **Municipalidad de Ahuachapán**, a través de su oficial de información, al correo transparenciaahuachapan@gmail.com; dejándose constancia impresa, en todos los casos, después de haberse realizado las notificaciones.


Notifíquese. -



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADO QUE LA SUSCRIBEN

HB/SD/RV

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los veintidós días del mes de enero de dos mil veintiuno.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP

